

Bogotá D.C., 15 de octubre de 2020. En la fecha se ingresa el proceso al Despacho de la señora Juez informando que el ente accionado dio respuesta al requerimiento.

Laura Montaña Conde
Secretaria



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**JUZGADO VEINTICUATRO DE FAMILIA DE
BOGOTÁ D.C.**

Clase de proceso	Acción de Tutela.
Accionante	Martha Isabel Guzmán Yara.
Accionado	Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Radicación	110013110024 2020 00380 00.
Asunto	Sentencia de tutela.
Fecha de la Providencia	Quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020).

Fenecido el término otorgado a la entidad accionada procede el Despacho con fundamento en la Ley a proferir la sentencia de tutela presentada por la señora Martha Isabel Guzmán Yara, quien actúa en causa propia, en contra de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, representado legalmente por su Director (a) o quien hagan sus veces para que se le tutele el derecho de petición e igualdad que considera como vulnerados. Como fundamento fáctico, expuso el siguiente;

HECHO

*Manifestó que en virtud de la respuesta que se le hiciera a un derecho de petición formuló el día 8 de agosto de 2020, una solicitud tendiente a que se le informara el valor y la fecha en que se le haría entrega de la indemnización de víctimas a que tiene derecho por ser víctima del conflicto armado.

ACTUACIÓN PROCESAL

La presente acción de tutela se admitió mediante auto de fecha 2 de octubre de 2020 ordenándose la notificación del mismo al director, representante legal o quien hiciera sus veces de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a quien se le concedió el término de dos días hábiles para que dieran respuesta a la acción de tutela atendiendo los hechos y pretensiones invocadas por la actora, así las cosas, se procedió a notificar al ente accionado por correo electrónico denominado notificaciones.juridicaariv@unidadvictimas.gov.co.

RESPUESTA DEL ENTE ACCIONADO.

El Doctor Vladimir MARTIN RAMOS, en calidad de Representante Judicial de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, según Resolución de nombramiento No. 01131 del 25 de octubre de 2016, solicitó negar las pretensiones de la actora en la medida en que en primer lugar la accionante se encuentra incluida en el registro por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO reconocido dentro del marco normativo de la Ley 1448 de 2011, en segundo lugar y que en razón a ello mediante comunicación con radicado de salida Orfeo número 202072026849331 de fecha 08 de octubre de 2020, se procedió a darle respuesta a lo en la que se le puso de presente la Resolución N°. 04102019-139348 del 14 de diciembre de 2019, la cual era de pleno conocimiento de la accionante. No obstante, resulta preciso advertir que, el orden de otorgamiento o pago de la indemnización está sujeto al resultado del Método Técnico de Priorización; en razón a lo dispuesto en el artículo 14 de la Resolución 1049vde 2019 que indica: En el caso que proceda el reconocimiento de la indemnización y la víctima haya acreditado alguna de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad referidas en el artículo 4 del presente acto administrativo, se priorizará la entrega de la medida de indemnización, atendiendo a la disponibilidad presupuestal de la Unidad para las Víctimas. Es por ello que la realización del método técnico se ejecutó el día 30 de junio de 2020 y en consecuencia mediante Oficio de Priorización de la entrega de la medida indemnizatoria de fecha 13 de julio de 2020, se le informó el resultado del Método Técnico de Priorización del año 2020, el cual no cobija al accionante para proceder con materialización de la entrega de la medida indemnizatoria en la presente vigencia fiscal, por lo anterior para el caso en particular del accionante, la unidad realizara las verificaciones correspondientes para determinar las víctimas que deberán ser incluidas en el Método Técnico de Priorización para el año siguiente.

CONSIDERACIONES DEL JUZGADO

Sea lo primero poner de presente que la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Nacional, se erige como un mecanismo especial establecido para la protección de los derechos constitucionales fundamentales de cualquier persona cuando se estimen amenazados o violados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, en los casos previstos en la ley.

El artículo 23 de la Constitución Política de 1991 dispone que "toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener una pronta resolución". Las peticiones pueden ser interpuestas ante algunos particulares y las autoridades públicas, puesto que a través de éstas se pone a la administración en funcionamiento, se accede a información o documentos, se elevan consultas y se exige el cumplimiento de distintos deberes.

Dentro de las garantías básicas del derecho de petición encontramos (i) la pronta resolución del mismo, es decir que, la respuesta debe entregarse dentro del término legalmente establecido para ello y, (ii) la contestación debe ser clara y de fondo respecto de lo pedido; esto quiere decir que, debe pronunciarse materialmente respecto de todos los hechos puestos a consideración. La Corte Constitucional ha definido a través de su reiterada jurisprudencia en la materia, que el núcleo esencial de este derecho fundamental se encuentra constituido por la posibilidad de presentar la petición, la resolución integral de la solicitud sin que ello signifique que la solución tenga que ser positiva y que la respuesta sea notificada dentro del término legalmente oportuno: "... una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario¹, es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea²; y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta³."

En otras palabras, la garantía del derecho de petición implica que exista una contestación que se pronuncie de manera integral acerca de lo pedido, sin que implique que la respuesta acceda a lo solicitado, puesto que la misma puede ser negativa siempre que no sea evasiva o abstracta. De igual manera, la respuesta debe ser oportuna, esto quiere decir que, además de ser expedida dentro del término establecido, debe ser puesta en conocimiento del peticionario, para que éste, si así lo considera oportuno, interponga los recursos administrativos que en cada caso procedan y, según el asunto, acceda a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

PRUEBAS

-Derecho de petición elevado por la accionante ante la Unidad para la Atención y Reparación de víctimas presentado de manera virtual.

-Respuesta elevada a la accionante de fecha 13 de julio y 8 de octubre de 2020.

ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO

En virtud de lo indicado en la parte motiva de esta providencia, según lo ha establecido la Corte Constitucional y de acuerdo a las pruebas recaudadas, se tiene que el derecho de petición que alega la accionante no fue vulnerado por la entidad accionada dado que esta demostró que mediante comunicación con radicado de salida Orfeo número 202072026849331 de fecha 08 de octubre de 2020, se procedió a darle respuesta a lo en la que se le puso de presente la Resolución N°. 04102019-139348 del 14 de diciembre de 2019, así mismo se le informó que el orden de otorgamiento o pago de la indemnización está sujeto al resultado del Método Técnico de Priorización; en razón a lo dispuesto en el artículo 14 de la Resolución 1049 de 2019 que indica: En el caso que proceda el reconocimiento de la indemnización y la víctima haya acreditado alguna de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad referidas en el artículo 4 del presente acto administrativo, se priorizará la entrega de la medida de indemnización, atendiendo a la disponibilidad presupuestal de la Unidad para las Víctimas, método técnico que se ejecutó el día 30 de junio de 2020 y en consecuencia mediante Oficio de Priorización de la entrega de la medida indemnizatoria de fecha 13

¹ Sentencias T-1160A de 2001 y T-581 de 2003.

² Sentencia T-220 de 1994.

³ Ver Sentencias T-669 de 2003, T -259 de 2004 y C-951 de 2014.

de julio de 2020, se le informó el resultado del Método Técnico de Priorización del año 2020, el cual no cubre al accionante para proceder con materialización de la entrega de la medida indemnizatoria en la presente vigencia fiscal, por lo anterior para el caso en particular del accionante, la unidad realizara las verificaciones correspondientes para determinar las víctimas que deberán ser incluidas en el Método Técnico de Priorización para el año siguiente.

Así las cosas, considera esta funcionaria judicial en sede de tutela que la respuesta que le fuera otorgada a la accionante fue efectiva y congruente entre lo pedido y lo resuelto, incluyéndose incluso el suministro de información adicional que se encuentra relacionada con la petición propuesta, razón por la que se negará el amparo solicitado, ordenándose para el efecto la remisión a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

Por lo expuesto, el Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogotá, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

R E S U E L V E:

PRIMERO. - NEGAR la acción de tutela promovida por la señora **Martha Isabel Guzmán Yara**, con fundamento en la motivación que antecede

SEGUNDO. - NOTIFICAR esta decisión a todas las partes involucradas en este asunto, por el medio más ágil y eficaz.

TERCERO. - REMITIR en caso de que no sea impugnado este fallo, la actuación a la Honorable Corte Constitucional para una eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,



ADRIANA PATRICIA DÍAZ RAMIREZ
Jueza